

Bogotá D.C.,

Señores  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
DELEGATURA PARA FUNCIONES JURISDICCIONALES  
E. S. D.

REFERENCIA. ACCIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR – ARTÍCULOS 57 y 58 DE LA LEY 1480 DE 2011 Y ARTÍCULO 24 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO.

RADICADO INTERNO: 2024057815-004-000  
1 – 12 BANCO GNB SUDAMERIS S.A.  
506 – FUNCIONES JURISDICCIONALES  
ANEXOS: 27  
EXPEDIENTE: 2024-8085  
DEMANDANTE(S): JESÚS ANTONIO LASPRILLA LASPRILLA  
DEMANDADO(S): ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA y BANCO GNB SUDAMERIS S.A.  
ASUNTO: CONTESTACIÓN DEMANDA

Respetados señores:

**JOHANNA ANDREA ZORRO RODRÍGUEZ**, mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad, identificada con cédula de ciudadanía número 52.898.163 de Bogotá D.C., Abogada en ejercicio, portadora de la Tarjeta Profesional número 150.376 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi condición de Apoderada General del BANCO GNB SUDAMERIS S.A., tal como se acredita con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., adjunto, encontrándome dentro del término de traslado de la demanda presentada por el señor JESÚS ANTONIO LASPRILLA LASPRILLA doy CONTESTACIÓN a la misma, en los siguientes términos:

#### **I. OPORTUNIDAD**

La demanda instaurada por el señor JESÚS ANTONIO LASPRILLA LASPRILLA, en adelante el Demandante, fue notificada mediante comunicación recibida por el Banco GNB SUDAMERIS S.A., el día 31 de mayo de 2024, entendiéndose notificado luego de transcurridos dos (2) días, corriendo el término de traslado de conformidad con el artículo 8 de la ley 2213 de 2022, por lo cual la presente contestación se presenta en forma oportuna.

#### **II. RESPECTO DE LAS PRETENSIONES**

Respecto a las pretensiones, nos oponemos en atención a que el comportamiento del Banco GNB Sudameris S.A., se encuentra ajustado a Derecho, por lo que solicito respetuosamente al

Despacho se condene a la parte Demandante en costas judiciales y agencias en derecho que con la presente demanda se ocasionen a mi mandante.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN PRIMERA: ME OPONGO EN SU TOTALIDAD A LA PRETENSIÓN PRIMERA** con relación al reconocimiento de vulneración de derechos fundamentales y restablecimiento del debido proceso, en cuanto el Banco no ha ocasionado vulneración alguna a los derechos del accionante, ni ha incumplido sus obligaciones legales o contractuales con relación al vínculo con el accionante.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN SEGUNDA: ME OPONGO EN SU TOTALIDAD A LA PRETENSIÓN SEGUNDA** con relación a la condena y pago de los daños morales y materiales estimados en \$42.000.000 COP M/CTE en cuanto el Banco no ha ocasionado vulneración a los derechos del accionante, ni ha incumplido sus obligaciones contractuales o legales. Asimismo, el accionante tampoco logró acreditar los perjuicios cuya indemnización pretende, pues no efectuó juramento estimatorio, ni aportó prueba adicional alguna para tal efecto.

Lo anterior, se comprobará con las explicaciones que a continuación extenderemos y las pruebas que soportan la contestación a los hechos y las excepciones.

### III. RESPECTO DE LOS HECHOS

A continuación, nos pronunciaremos sobre los hechos expuestos por el demandante, precisando que toda vez que los mismos no se encuentran enumerados y corresponden a un relato y apreciación subjetiva del demandante sobre la forma en que fue desembolsada y ha sido pagada la obligación, nos pronunciamos como se indica a continuación:

**RESPECTO AL HECHO PRIMERO (PÁRRAFO SEGUNDO DEL CUERPO DE LA DEMANDA): NO SE ADMITE Y NO ES CIERTO** que el Banco GNB Sudameris S.A., realizara la compra de cartera de la obligación del Banco Popular No 105441127 del señor JESÚS ANTONIO LASPRILLA LASPRILLA por valor de \$4.300.000,00 a un plazo de setenta y dos (72) meses y con cuotas por valor de \$106.936.

Con el fin de aclarar la relación jurídica con el accionante, informamos que el 27 de noviembre de 2017 el Banco aprobó la solicitud de crédito del demandante y realizó el desembolso del crédito No. 105110428, bajo la modalidad de libranza, en virtud del convenio existente con COLPENSIONES, bajo las siguientes condiciones financieras:

CONCEPTO	VALOR	COSTO DE CHEQUE	4*1000	TOTAL
Cheque de Gerencia a favor de CREDIFINANCIERA	\$13.235.060,00	\$23.800.00	\$52.940,24	\$13.311.800,24
Estudio de crédito	\$35.700.00	\$0.00	\$0.00	\$35.700.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$13.347.500,24</b>



Así las cosas, tal como consta en el **Anexo 5** de la presente contestación, mediante el documento denominado autorización de desembolso el accionante autorizó que el crédito solicitado por la suma de \$13.235.060 fuese desembolsado a la entidad CREDIFINANCIERA. No obstante, el cheque girado para la compra de cartera fue fraccionado en razón a que el saldo de la obligación objeto de la compra al momento de efectuar el pago era inferior al adeudado por el Demandante a CREDIFINANCIERA según consta en el extracto de pago expedido por la citada entidad, siendo cancelada finalmente la obligación por un valor de \$13.060.260,00 el día 12 de diciembre de 2017, según consta en el registro de pago adjunto **Anexo 1**, proceso del cual se generó un saldo a favor del cliente por la suma de \$174.800,00 recursos que fueron recibidos por el cliente en efectivo el día 12 de diciembre de 2017, en la oficina Principal de la ciudad de Tunja, según soporte adjunto, **Anexo 2**.

Mediante **Anexo 3**, se adjunta tabla de amortización en la cual se relacionan las condiciones financieras aprobadas para la citada obligación:

CONDICIONES FINANCIERAS	
No. Obligación	105110428
Fecha de Desembolso	27/11/2017
Monto	\$13.347.500,24
Valor cuota	\$316.226,00
Plazo	108 meses
Fecha primer vencimiento	10/04/2018
Fecha último vencimiento	10/03/2027

Dichas condiciones fueron informadas al señor Lasprilla Lasprilla previo al otorgamiento del crédito según se observa en el documento "Información Previa al Otorgamiento de Créditos de Libranza" adjunto, **Anexo 4**, suscrito por él en señal de aceptación de su contenido. Así mismo remitimos para conocimiento de esa Superintendencia, copia de los documentos en los que se evidencia que su aprobación y desembolso se realizó conforme la solicitud efectuada al Banco, **Anexo 5**.

Al respecto informamos a esa Superintendencia que para la incorporación de los descuentos en la nómina del cliente con destino al pago del crédito No. 105110428, el Banco el día 27 de noviembre de 2017 envió la novedad de descuento a la pagaduría del convenio COLPENSIONES remitiendo las condiciones financieras relacionadas en la tabla de amortización que se remite como Anexo 2, la cual no fue incorporada con éxito por cuanto de acuerdo con las validaciones realizadas con la pagaduría el cliente, para ese momento, no presentaba la suficiente capacidad de descuento, situación que ocasionó el vencimiento del crédito.

Es de resaltar que el Banco envió en las fechas del 06 de diciembre de 2017 y 24 de enero de 2018, según soporte adjunto, **Anexo 5.1**, reproceso de incorporación de cuota sin que las mismas fueran exitosas presentando la misma causal de rechazo "Supera Capacidad", lográndose su incorporación de manera exitosa hasta el día 21 de febrero de 2019 por el valor de la cuota \$316.226,00.

Informamos a esa Superintendencia que la obligación objeto de la presente demanda, corresponde a un crédito otorgado en desarrollo de convenios de libranza, en el cual las partes establecen dos mecanismos para el pago de la obligación.

El primero de ellos, a través del descuento de nómina debido a la libranza suscrita adjunta a la presente contestación como **Anexo 6**, descontando el empleador del deudor los valores destinados al pago de la cuota mensual del crédito.

El segundo mecanismo, es el pago de las cuotas en las ventanillas del Banco. Tal como se prevé el *Reglamento Crédito de Libranza*, **Anexo 7**, del cual a continuación se transcribe el aparte pertinente:

*“3.2. En el evento en que un determinado periodo no opere el descuento por nómina o no se realice el traslado de la totalidad de los recursos al BANCO, el CLIENTE debe efectuar el pago oportuno a través de la Red Nacional de Oficinas, en los Cajeros Automáticos de Servibanca, en las cuentas de recaudo nacional en otras entidades financieras autorizadas o en la Banca Virtual del BANCO para Clientes que tengan acceso a este canal, por ser titulares de otros productos.”.*

Lo anterior, fue puesto en conocimiento del demandante según se evidencia en el *Contrato para la Utilización de Productos Financieros*, **Anexo 8**:

Es importante destacar que el deudor tiene obligación de estar atento al pago de las cuotas conforme a su calidad de deudor, estando en todo caso obligado a efectuar el pago de las cuotas aún en el evento en que no hubiera operado el descuento total de la cuota a través del mecanismo de libranza, de acuerdo con lo pactado en la libranza, e indicado anteriormente.

Así las cosas, ante el vencimiento presentado en el crédito, el Banco remitió mensajes de texto enviados al celular 3202858958, **Anexo 9**, y cartas de aviso de mora a través de la cual se informó sobre el vencimiento presentado en el pago de la obligación y el posible reporte que se efectuaría ante las Centrales de Información Financiera, comunicaciones de las cuales adjuntamos copia junto con el respectivo acuse, **Anexo 10**, las cuales fueron remitidas a la dirección Carrera 10A No. 29ª – 40 Apartamento 601 el Recreo, en la ciudad de Sogamoso - Boyacá, que corresponde a la registrada por el demandante en el documento que se adjunta como **Anexo 5**.

**EN CUANTO AL HECHO SEGUNDO (PÁRRAFO TERCERO DEL ESCRITO DE LA DEMANDA): NO ES CIERTO Y NO SE ADMITE** que el Banco tenga un actuar dominante, arbitrario e injusto con relación a las cuotas y plazos de la deuda del cliente.

Al respecto, es importante mencionar que teniendo en cuenta que durante el periodo de abril de 2018 a marzo de 2019 no se recibieron pagos según se observa en el histórico de pagos que se remite como **Anexo 11**, dado la capacidad de descuento que presentaba el cliente para ese momento, el crédito se ajustó operativamente (Normalización) conforme a los términos y condiciones pactados, procedimiento que se realizó con el fin de otorgarle plazos adicionales al señor Lasprilla Lasprilla para evitar mayores perjuicios por la generación de intereses moratorios, el inicio de acciones judiciales o de cobro y los reportes con calificación de mayor riesgo que se pudieran generar ante las Centrales de Información Financiera.



Dichos ajustes fueron realizados en virtud de lo indicado en el reglamento adjunto como Anexo 7, el cual se encuentra a disposición de nuestros clientes en el sitio web: [www.gnbsudameris.com.co](http://www.gnbsudameris.com.co), y que se reitera, fue puesto en su conocimiento a través del documento *Contrato Para la Utilización de Productos y Servicios Financieros* que se adjunta como Anexo 8.

No obstante y ante la inconformidad del demandante, los ajustes operativos fueron anulados y a la fecha el demandante presenta con el Banco la obligación No. 19179872 que corresponde a la inicialmente aprobada, con los plazos y valor de la cuota aprobados inicialmente.

**EN CUANTO AL HECHO TERCERO (PÁRRAFO CUARTO DE LA DEMANDA INICIAL): NO ES CIERTO Y NO SE ADMITE** que el accionante haya efectuado el pago oportuno de todas y cada una de las cuotas pactadas.

En efecto, en cuanto a lo mencionado por el demandante, informamos que para el crédito a cargo del señor Lasprilla la pagaduría ha reportado un total de 63 abonos para el periodo comprendido entre el mes de abril de 2019 hasta el mes de abril de 2024, todos por el valor de la cuota fija inicialmente pactada de COP \$316.226,00, según se detalla en el histórico adjunto como **Anexo 11**, sin que a la fecha el demandante haya hecho llegar al Banco los soportes de los pagos reportados por el convenio a nuestra entidad correspondiente al periodo en que no se efectuaron los mismos (abril de 2018 a marzo de 2019).

Ahora bien, al efectuarse la reversión de los ajustes operativos y liquidarse conforme las condiciones inicialmente pactadas con el demandante, el crédito pasó a presentar vencimiento, y a liquidarse valores por concepto de intereses moratorios según la orden de aplicación de pagos establecida en el documento "*Guía del Consumidor Financiero – Credilibranzas Banco GNB Sudameris*" **Anexo 12**, la cual se encuentra disponible en el sitio web [www.gnbsudameris.com.co](http://www.gnbsudameris.com.co) para consulta permanente de nuestros clientes y usuarios.

Cabe mencionar que el Banco ha emitido al demandante las respuestas que se adjuntan como **Anexos 13 al 24**, a través de las cuales se ha brindado las explicaciones que corresponden al comportamiento de pago del crédito a cargo del señor Jesus Antonio Lasprilla Lasprilla, en atención a las quejas presentadas por el demandante ante nuestra Entidad.

Por lo anterior, confirmamos que los valores pagados por el cliente al Banco no cubren la totalidad de las sumas adeudadas a la fecha, por lo tanto, confirmamos que el crédito No. 105110428 se encuentra vencido, con un saldo total proyectado al corte del 13 de junio de 2024 por valor de \$15.283.188,10.

**EN CUANTO AL HECHO CUARTO (PÁRRAFO QUINTO DE LA DEMANDA INICIAL): NO SE ADMITE Y NO ES CIERTO** pues, además, versa sobre consideraciones subjetivas que no constituyen en realidad un supuesto fáctico sobre el cual deba emitirse pronunciamiento. Sin embargo, debe decirse que El Banco ha brindado oportunamente debida contestación al accionante, y ha efectuado la reversión de los ajustes operativos con el fin de garantizar las condiciones iniciales del crédito. Asimismo, el deudor ha incumplido sus obligaciones contractuales, pues recuérdese que no efectuó pago alguno entre los meses de abril de 2018 a marzo de 2019. Esta situación ha ocasionado que el deudor se encuentre en mora y en consecuencia haya incumplido sus obligaciones contractuales sobre las cuales se han ofrecido alternativas de pago para su normalización.



#### IV. CONSIDERACIÓN PRELIMINAR: INEPTITUD DE LA DEMANDA

Previo a emitir pronunciamiento con relación a las excepciones de mérito, la suscrita se permite poner de presente que las irregularidades presentadas por el accionante en el escrito de la demanda inicial impiden que se den los supuestos de demanda en forma para poder adelantar adecuadamente el proceso de la referencia, y emitir un pronunciamiento de fondo. Al respecto, debe precisarse que la demanda no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 82 del Código General del Proceso (C.G.P.) por múltiples situaciones, las cuales afectarán las siguientes etapas procesales, dificultando la fijación del litigio y un eventual pronunciamiento de fondo.

En primer lugar, de conformidad con el numeral 5 del artículo 82 del C.G.P., el estatuto procesal exige al accionante que los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones de la demanda se encuentren debidamente clasificados y numerados. Esta situación no se debe entender como un mero formalismo, sino como un habilitante que permite identificar la situación fáctica objeto de controversia, de manera que sea de la mayor claridad posible para los sujetos procesales. Esta situación ha sido entendida por la doctrina como un elemento esencial no solo para el adecuado orden del proceso, sino para garantizar de manera efectiva el derecho de defensa del demandado. Al respecto, el Dr. Sanabria, H. ha comentado lo siguiente:

*“...Por eso, el numeral 5 del artículo 82 del CGP establece que los hechos que sirven de sustento a las pretensiones debe presentarse “debidamente determinados, clasificados y numerados”, exigencia que no solo busca que la demanda sea clara y con ello se le de orden al proceso, sino también garantizar el ejercicio del derecho de defensa del demandado, que en su contestación tiene la carga de darle respuesta precisa a cada uno de los hechos, lo cual se dificultaría en grado extremo si el demandante los presentara en desorden, sin diferenciar unos de otros, mezclando apreciaciones personales o meramente subjetivas con circunstancias verificables y que en verdad ocurrieron, exponiendo aspectos contradictorios o ininteligibles, sin acudir a la numeración correspondiente (...)”.*

Dicho lo anterior, en efecto, el numerar, determinar y clasificar los hechos permitirá ejercer adecuadamente el derecho de defensa por parte del demandado, identificar sobre qué aspectos están o no de acuerdo las Partes, y determinar sobre cuáles hechos existe un medio de prueba y en cabeza de quien está la carga procesal de acreditarlo. No obstante, como se puede evidenciar en el escrito de la demanda inicial, las afirmaciones del accionante son tan gaseosas e incomprensibles, además de comprender afirmaciones meramente subjetivas no susceptibles de prueba, que les dificultan a las Partes como al juez el adelantamiento de las demás etapas procesales. Véase que incluso entre los párrafos del escrito de la demanda se pueden identificar apreciaciones subjetivas, normativas, y fácticas, sobre las cuales no es identificar si se trata de un hecho o de una acusación, o de una mera opinión. Con esta situación no se pretende en ningún caso limitar el acceso a la administración de justicia, sino por el contrario garantizarlo a todos los sujetos en la medida en que se permita efectivamente fijar adecuadamente en una etapa posterior, cual es la del artículo 372 del C.G.P., el litigio objeto del proceso.

<sup>1</sup> Henry Sanabria Santos, *Derecho Procesal Civil General, Capítulo 5 Demanda y Contestación*, Bogotá D.C. Universidad Externado de Colombia, 2021. P. 449.



En segundo lugar, de conformidad con el numeral 7 del mismo artículo 82 del C.G.P., es deber del accionante efectuar el juramento estimatorio cuando esto sea necesario.

Para este punto, la suscrita se permite transcribir el aparte del breve escrito de la demanda en el cual solicita aparentemente la indemnización de perjuicios:

*Las pretensiones que exijo es que se reconozca mis derechos fundamentales y se restablezca el debido proceso y estimo que los daños morales y materiales son de \$42.000.000.*

*Aporto como pruebas; la queja, la tutela con las pruebas que son las mismas y sus respectivas respuestas.*

**ARTÍCULO 206. JURAMENTO ESTIMATORIO.** *Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación.*

Así, es obligación del accionante que pretenda la indemnización de perjuicios efectuar el debido juramento estimatorio, el cual servirá como medio de prueba del monto de los perjuicios pretendidos, hasta que este sea objetado. En virtud de lo anterior, tal como se desprende de la lectura del precitado artículo 206, el accionante debe estimar bajo la gravedad de juramento, de manera razonada, y discriminando cada uno de los conceptos, el monto de los perjuicios cuya indemnización pretende. Al respecto, la doctrina, a partir de la lectura el mismo artículo, ha precisado los siguiente:

*En consecuencia, cuando en la demanda se solicite el pago de una indemnización, se pida una compensación o se pida el pago de frutos o mejoras, deberá el demandante bajo juramento indicar a cuánto asciende el valor reclamado y ofrecer una explicación razonada de dicha suma, discriminando los diferentes conceptos que la componen.*

*No tiene como propósito el juramento estimatorio que se haga una liquidación pormenorizada, detallada y matemáticamente compleja; simplemente lo que la figura exige es que el demandante bajo juramento diga cuánto pretende, y explique de donde se obtiene el valor reclamado y, desde luego, que si existen varios conceptos, se diferencien y discriminen<sup>2</sup>.*

Dicho lo anterior, es evidente que el accionante no efectúa el juramento estimatorio, ni tampoco lo menciona como prueba de su demanda. Asimismo, si se considera que la afirmación que efectuó en la demanda es el juramento estimatorio, este no reúne los requisitos esenciales del mismo, de manera que no hace distinción de los conceptos que componen la suma pretendida, no explica las razones que considera dan lugar a dicha suma, ni evoca la gravedad de juramento que le es exigible al juramento estimatorio como medio de prueba.

---

<sup>2</sup> *Ibíd*em, 451.



En tercer lugar, el accionante no es claro con relación a las pretensiones de la acción interpuesta. En efecto, del aparte previamente transcrito, no es dable concluir la pretensión declarativa que daría lugar a una pretensión de condena, ni la forma en la que desea el accionante que le sea restablecido los derechos fundamentales y el debido proceso. Así, el accionante no menciona si lo que pretende es la declaratoria de un incumplimiento contractual, ni tampoco la forma en la que considera que se le ha violado el debido proceso y la consecuencia jurídica que de ello pretende derivar. Asimismo, menciona estimar unos daños por valor de \$42.000.000, pero no menciona si ello se da como pretensión indemnizatoria, ni tampoco menciona si se da como consecuencia de la vulneración a lo que denomina debido proceso. Ahora si bien el artículo 57 de la ley 1480 de 2011 le permite al juez fallar *infra, ultra o extra petita*, ello no quiere decir que el accionante no deba cumplir con los requisitos del artículo 82 del C.G.P., los cuales además permiten acreditar los requisitos de demanda en forma para poder emitir un fallo de fondo. Esta situación no es una mera formalidad, sino un verdadero requisito de admisión de la demanda, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 82 del C.G.P., y que permite trabar la litis adecuadamente.

En cuarto lugar, el accionante tampoco menciona si quiera de manera sumaria los fundamentos de derecho sobre los cuales pretende hacer valer en el proceso. En efecto, no menciona norma jurídica alguna en su escrito inicial. Esta situación también va en contravía de los requisitos del numeral 8 del artículo 82 del C.G.P. que fueron obviados por el despacho a la hora de decidir sobre su admisión.

Dicho lo anterior, no hay solo una razón para haber inadmitido la demanda sino varias razones, las cuales trascienden de un mero formalismo, y se convierten en un verdadero requisito para poder adelantar adecuadamente el proceso de la referencia. Se advierte al despacho que esta situación transgrede los presupuestos de demanda en forma, y dificulta el pronunciamiento de aspectos tan esenciales como los fundamentos fácticos de la demanda. Ahora, si bien pudiera pensarse que estas situaciones debieron alegrarse como excepción previa interponiendo recurso de reposición en el término de ejecutoria de la providencia, también es cierto que el juez cuenta con diversos mecanismos para enderezar el proceso, sea a través de la reconocida teoría del antiprocesalismo<sup>3</sup>, o sea a través del control de legalidad, el cual podrá efectuarse en cada etapa del proceso de conformidad con el artículo 132 del C.G.P. Con lo anterior no se busca el rechazo de la demanda de manera inmediata o coartar el derecho de acción del demandante, sino por el contrario, si así lo considera el despacho, una vía procesal (v. gr. inadmisión) que permita cumplir los presupuestos de la demanda, subsanar las irregularidades procesales, garantizar el derecho de defensa que le atañe a mi poderdante, y facilitar la fijación del litigio en su debida oportunidad.

<sup>3</sup> “Referente a este último tópico, denotó que «los yerros en que incurren los jueces al momento de resolver los asuntos puestos a su conocimiento» pueden ser removidos del ámbito procesal a fin de darle preeminencia a la legalidad, doctrina tal que «algunos han conocido como el “antiprocesalismo” o la “doctrina de los autos ilegales”, [la cual] sostiene que, salvo en el caso de la sentencia que desata el litigio planteado por las partes, la ejecutoria de las demás providencias judiciales **no obstan para que el mismo juez que las profirió se aparte luego de su contenido cuando encuentre que lo dicho en ellas no responde a lo ordenado por el ordenamiento jurídico**” (negrilla fuera del texto original) (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia STC7397-2018, 30 de mayo de 2018. M.P. Margarita Cabello Blanco).



## V. EXCEPCIONES DE MÉRITO

Dicho lo anterior, el Banco se permite formular las siguientes excepciones considerando que el Banco ha dado estricto cumplimiento a sus obligaciones legales y contractuales; la obligatoriedad del cumplimiento que recae sobre el accionante para efectuar el pago de sus obligaciones; la ausencia de los elementos de responsabilidad civil contractual y extracontractual; la prescripción extintiva de la acción; y las demás excepciones que resulten probadas en el proceso de conformidad con el artículo 282 del C.G.P.

### A. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A CARGO DEL BANCO

De acuerdo con la contestación dada a los hechos de la demanda, se tiene que el Banco GNB Sudameris ha dado cumplimiento a las obligaciones a su cargo, en particular, a la de efectuar el desembolso de los recursos, hacer una correcta y adecuada liquidación del crédito No. 105110428 y una adecuada imputación de los pagos hechos por el demandante.

Conforme se observa en los históricos de pagos adjuntos, el Banco para cada uno de los periodos oportunidades de pago, ha liquidado e imputado los abonos a los saldos existentes a cargo del demandante, en aplicación de los artículos 881 del Código de Comercio y 1653 del Código Civil, en cuanto al cobro en primer lugar de los intereses, pues si se deben capital e intereses, el pago se imputa primero a los intereses y posteriormente a capital.

Por otro lado, el demandante argumentó que se le han modificado sin su autorización las condiciones del crédito inicial, alterándose las cuotas y plazos pactados inicialmente. Al respecto, debe decirse que dicha situación no es cierta. Si bien en un primer momento lo que ocurrió realmente fue una novedad de libranza por normalización (ajuste operativo), la cual se realiza a efectos que el deudor no continúe en mora y beneficiar su situación crediticia, de conformidad con la cláusula 5.1 del documento denominado Reglamento Crédito de Libranza, el cual se aporta como **Anexo 7**, dichos ajustes operativos fueron revocados en su totalidad. Al respecto, dicha cláusula establece lo siguiente:

#### 5. Novedades de Libranza

**5.1 Normalización.** *Es el proceso efectuado a operaciones que presentan vencimiento en el pago de las cuotas, las cuales no fueron descontadas por nómina ni pagadas por el CLIENTE y consiste en ampliar el plazo de la obligación para atender el saldo total de la misma de acuerdo con la capacidad de pago del CLIENTE en su nómina, manteniendo la tasa inicialmente pactada.*

**5.1.1** *La normalización podrá ser efectuada una vez se verifique por parte del Banco el cumplimiento de las siguientes condiciones.*

- a) *El BANCO notificará al CLIENTE por cualquiera de los canales habilitados el incumplimiento del pago informándole la opción de atender las cuotas atrasadas del crédito y los costos asociados a la morosidad, o aceptar la normalización de la obligación.*





- b) *Para el caso de la normalización, el CLIENTE contará con un plazo máximo de ocho (8) días calendario para manifestar su voluntad contados a partir de la fecha de la notificación. En caso de no recibir respuesta en el plazo indicado, se entenderá aceptado por el CLIENTE la aplicación del proceso de la normalización.*

Así las cosas, con el fin de aclarar la situación, el Banco aplicó en su momento dos (02) novedades de libranza por Normalización (ajuste operativo), las cuales fueron debidamente comunicadas en los términos del Reglamento previamente descrito, y cuentan con acuse de recibo físico tal como consta en el **Anexo 25**. En primera medida, el cliente incumplió el pago de la primera cuota, la cual estaba programada según las condiciones iniciales para el día 10 de abril de 2018, tal como consta en el **Anexo 3** del presente escrito. En este sentido, el Banco procedió en reiteradas a requerir ocasiones al deudor para que efectuara el pago de sus obligaciones, tal como consta en el reporte de SMS enviados que constan en el **Anexo 9** del presente escrito. Sin obtener respuesta favorable del pago, y al persistir la mora del accionante, el Banco mediante comunicación del día 15 de junio de 2018 puso en conocimiento del cliente la aplicación de la cláusula de normalización para la cual se le concedió el término de ocho (8) días calendario con el fin de manifestar su aceptación o rechazo, so pena de entenderse aceptada tal situación. Lo anterior, tal como consta en el folio 20 del **Anexo 14** de la presente contestación.

En segunda medida, debe precisarse que el deudor persistió en mora durante todo el año 2018, el primer pago de la obligación adquirida fue recibido hasta el día 03 de abril de 2019, tal como consta en el histórico de pagos que se aporta como **Anexo 11** a la presente contestación. Así, teniendo en cuenta que el accionante inició el pago de sus obligaciones, el Banco con el fin de aliviar la situación morosa aplicó la segunda novedad de libranza por Normalización (ajuste operativo), de forma tal que la mora del año 2018 y 2019 ya no seguiría registrada, y continuaría con el plan de pagos en los términos de la normalización. Esta normalización le fue comunicada al accionante el día 15 de mayo de 2019, tal como consta en el **Anexo 26** de la presente contestación.

Ambas comunicaciones fueron efectivamente recibidas por el cliente, tal como consta en el **Anexo 27** de la presente contestación, y no fueron contestadas por el cliente, de manera que se aplicó la normalización de conformidad con la cláusula 5.1 del Reglamento Crédito de Libranza.

Aclarado lo anterior, habiendo transcurrido más de dos (2) años contados a partir del último ajuste operativo, el accionante procedió a efectuar solicitudes al Banco con el fin de que se informara la situación de su crédito y los ajustes operativos. Así las cosas, dadas las solicitudes del accionante, el Banco decidió revocar los anteriores ajustes de normalización, de manera que actualmente no hay ajuste operativo vigente aplicable al crédito. No obstante, esta revocatoria lo que conlleva es, lógicamente, que el deudor esté en mora de sus obligaciones, pues recuérdese que mientras que la primera fecha de vencimiento de su cuota estaba programada para el 10 de abril de 2018, este no efectuó ningún pago entre los meses de abril de 2018 a marzo de 2017. Así, en cuanto los ajustes realizados para que el accionante normalizara su obligación fueron revocados por solicitud de este, actualmente el contrato se encuentra incumplido, y las obligaciones se encuentran actualmente en mora por un periodo muy superior a 180 días calendario.



De la situación narrada previamente, debe decirse entonces, señor juez, que el Banco ha dado estricto cumplimiento a las condiciones pactadas, e incluso cuando la normalización (ajuste operativo) fue aplicada en virtud de la cláusula 5.1 del Reglamento de Crédito de Libranza, estos ajustes fueron revocados a solicitud del cliente. De esta manera, el crédito conserva sus condiciones iniciales, y el deudor actualmente se encuentra en mora de sus obligaciones.

## **B. EL CONTRATO ES LEY PARA LAS PARTES**

Debe partirse de la base de que se trata de un acuerdo de voluntades que se torna obligatorio para las partes, conforme a lo previsto en el Art. 1602 del Código Civil, y que dicho acuerdo impuso obligaciones al Banco y al deudor, no sólo a lo pactado expresamente en él sino también a todo lo que corresponda a la naturaleza del contrato de crédito mismo.

De la misma manera, manifestamos que la relación existente entre el Banco y el demandante corresponde a una operación de crédito o mutuo, autorizada por el literal e) del artículo 7 del EOSF, así como por los artículos 1163 del Código de Comercio y siguientes. Así las cosas, el artículo 1163 del código de comercio establece que: *"Salvo pacto expreso en contrario, el mutuario deberá pagar al mutuante los intereses legales comerciales de las sumas de dinero o del valor de las cosas recibidas en mutuo (...)".*

De la norma citada, nace para el otorgante del crédito dos obligaciones principales: a) efectuar el desembolso o entrega de los recursos y b) hacer una correcta liquidación del crédito y los intereses en las condiciones pactadas. A su vez, se deriva una responsabilidad para el deudor, consistente en restituir la suma prestada y pagar los intereses en las condiciones definidas por las partes.

Para el caso que nos ocupa, está probada la existencia de un contrato de préstamo entre las partes, tal como lo reconoce el propio demandante en los hechos de la demanda y con los documentos aportados al proceso, habiendo cumplido el Banco con su obligación de desembolsar unos recursos a nombre del demandante en su obligación vigente No. 105110428. Asimismo, respecto de la liquidación del crédito No. 105110428 en forma correcta, junto con sus intereses, el Banco ha cumplido a cabalidad con dicha obligación, pues no se determina la existencia de cobro de intereses o valores que no correspondan o que estén por fuera de los términos de ley, respetando en todo momento las condiciones acordadas, tomando para ello siempre el saldo por concepto de capital y los días pendientes de pago.

De esta manera, mal podría alegar el demandante su propia culpa e incumplimiento de sus obligaciones, para ahora accionar al Banco sobre el cobro de las sumas adeudadas. Tal situación no debe tener cabida en el presente proceso, pues incentivaría el incumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas con las entidades financieras, las cuales cuentan con la imperiosa obligación de administrar adecuadamente los recursos captados del ahorro del público.

## **C. AUSENCIA DE LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRA CONTRACTUAL**

Ahora bien, comentado lo anterior, es claro que el Banco no ha incumplido obligación legal o contractual alguna que tenga un nexo causal adecuado con algún daño que se encuentre



probado en el presente proceso. En este sentido, de conformidad con los elementos de la responsabilidad civil, sea contractual o extracontractual, y de conformidad con los artículo 167 del C.G.P. y el artículo 1757 del Código Civil, le corresponde al accionante probar el (i) incumplimiento contractual o el hecho dañoso generador de la responsabilidad; (ii) la culpa imputable al demandado que ocasiona el incumplimiento contractual o el hecho dañoso; (iii) el daño o perjuicio sufrido sobre el cual se pretende su indemnización; (iv) y el nexo causal entre el incumplimiento o hecho culposos y el daño o perjuicio sufrido por el accionante.

En este sentido, en el expediente no obra prueba alguna que acredite ni el incumplimiento alegado, ni un hecho de carácter extracontractual dañoso, ni tampoco obra medio de prueba alguno sobre el mismo daño. Esta orfandad probatoria impide declarar responsable civilmente al Banco, de manera que no existen elementos de hecho o de derecho sobre las cuales sea posible condenar al Banco a la indemnización de perjuicio alguno.

En cuanto al hecho o incumplimiento ya se ha referido previamente alegando la excepción de cumplimiento del contrato y del contrato es ley para las Partes. Por otro lado, en cuando al daño sufrido, el accionante se limita simplemente a afirmar que sus pretensiones ascienden a la suma de \$42.000.000. Esta suma ni si quiera se afirma bajo la gravedad de juramento sobre la cual pueda predicarse si quiera el medio de prueba del juramento estimatorio. Y aún, no es posible identificar de manera razonada y justificable que estos perjuicios respondan a alguna situación en particular. Con ello no se le quiere exigir, como se comentó previamente, que efectúe algún tipo de cálculo o liquidación pues esta situación no es necesaria para el juramento estimatorio, pero sí, por lo menos, que se presenten las razones que dan lugar a tal estimación. Razones que cuando menos deben ser comprensible y de fácil identificación en el escrito de la demanda. Sin embargo, la estimación parece no atender a ningún criterio razonable, pues de la afirmación no se puede evidenciar que la estimación haya obedecido a las cuotas, o a los intereses, o a los daños morales, o cualquier daño emergente, lucro cesante o daños extrapatrimoniales del accionante.

Por lo anterior, existe completa orfandad probatoria que acredite el incumplimiento o hecho dañoso sobre el cual se endilga responsabilidad, y mucho menos del daño sobre el cual se pretende la indemnización. Sin estos elementos, ni si quiera es posible comentar sobre la culpa o el nexo causal, pues no hay elementos de hecho o de derecho en el presente proceso que sean suficientes para realizar este análisis.

#### **D. PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA**

Ahora bien, debe precisarse que de la demanda interpuesta por el accionante es posible evidenciar que sus pretensiones versan sobre el "reconocimiento de sus derechos fundamentales y del debido proceso", así como la "indemnización de sus daños morales y materiales". Esta situación deriva en una discusión no netamente contractual, sino de actuaciones al parecer extracontractuales y del ejercicio del poder "dominante o arbitrario" del Banco, según palabras del accionante. Así las cosas, el numeral 3 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011 establece el término de "prescripción" de la acción, más bien haciendo referencia al término de caducidad de la misma, el cual será de un (1) año contado a partir del conocimiento del cliente sobre el hecho que considera vulnerador de sus derechos. Al respecto reza el precitado artículo:



**ARTÍCULO 58. PROCEDIMIENTO.** Los procesos que versen sobre violación a los derechos de los consumidores establecidos en normas generales o especiales en todos los sectores de la economía, a excepción de la responsabilidad por producto defectuoso y de las acciones de grupo o las populares, se tramitarán por el procedimiento verbal sumario, con observancia de las siguientes reglas especiales:

(...)

3. Las demandas para efectividad de garantía, deberán presentarse a más tardar dentro del año siguiente a la expiración de la garantía y las controversias netamente contractuales, a más tardar dentro del año siguiente a la terminación del contrato. **En los demás casos, deberán presentarse a más tardar dentro del año siguiente a que el consumidor tenga conocimiento de los hechos que motivaron la reclamación.** En cualquier caso deberá aportarse prueba de que la reclamación fue efectuada durante la vigencia de la garantía.

De la lectura de la norma, es posible evidenciar que toda acción que verse sobre situaciones que no sean netamente contractuales deberán iniciarse máximo en el término de, como se comentó, un (1) año. Así, en cuanto al parecer el cliente pretende el restablecimiento de su derecho al debido proceso, y manifiesta su inconformidad con la posición dominante del Banco, con ocasión a la novedad por normalización efectuada por el Banco en los años 2018 y 2019, la acción se encuentra completamente prescrita, pues debió iniciarse máximo el día 15 de mayo de 2020, fecha en la cual transcurrió el año desde la comunicación del ajuste operativo efectuada fue el día 15 de mayo de 2019.

#### **E. LA GENÉRICA DE QUE TRATA EL ARTICULO 282 DEL C.G.P.**

Finalmente, se propone la excepción genérica de que trata el artículo 282 del C.G.P., en virtud del cual se impone la obligación del juez de conocimiento reconocer oficiosamente una excepción en caso de encontrarla probada dentro del trámite del proceso. AL respecto, reza el precitado artículo:

**ARTÍCULO 282. RESOLUCIÓN SOBRE EXCEPCIONES.** En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda.

De esta manera, se solicita de manera respetuosa que en caso de encontrarse probada alguna situación de hecho o de derecho que configure una excepción a la presente acción, se dé estricta aplicación al artículo previamente citado y se de por finalizado el proceso negando las pretensiones del accionante.

#### **VI. OBJECCIÓN AL JURAMENTO ESTIMATORIO**

Comentado lo anterior, es preciso determinar las razones sobre las cuales se fundamenta la objeción, y las sanciones que deberán imponerse al demandado con ocasión de la inexactitud o negación de las pretensiones de su demanda.





#### **A. EN CUANTO A LOS FUNDAMENTOS DE LA OBJECCIÓN**

Para este punto, debe precisarse que la suscrita considera que la afirmación efectuada por el accionante en el escrito de la demanda inicial en absoluto debe ser entendido como juramento estimatorio, pues como se comentó, no somete la afirmación efectuada a la gravedad de juramento, no menciona las razones que justifiquen o expliquen razonadamente el daño, y no discrimina los conceptos de daño patrimonial, extrapatrimonial, daño emergente, lucro cesantes o cualquier otro tipo de daño. La afirmación se limita a decir que pretende el pago de \$42.000.000, como si en la misma pretensión efectuara el juramento.

Sin embargo, si se considerase que dicha afirmación configura efectivamente el medio de prueba de juramento estimatorio, se hace preciso presentar formalmente la objeción al mismo en los siguientes términos.

En primera medida, como se comentó, no es posible identificar la forma como razonadamente se podría determinar que el perjuicio demandado asciende a la suma de \$42.000.000. En efecto, el accionante determina que la suma de los daños morales y materiales tienen un valor total de \$42.000.000, no siendo posible determinar con exactitud qué proporción corresponde a que tipo de daño patrimonial. De igual forma, tampoco es posible determinar que los \$42.000.000 corresponden en su totalidad a los daños materiales por concepto de daño emergente, o si también está incluyendo en su cálculo el lucro cesante por concepto de suma aportada que le haya representada una pérdida de rentabilidad en el dinero que ha pagado.

En segunda medida, como se comentó, la apreciación de los perjuicios por valor de \$42.000.000 es totalmente inexacta, pues es que el cliente durante toda la vigencia de la relación comercial no ha efectuado pago si quiera de \$20.000.000. En efecto, de conformidad con el histórico de pagos, el accionante ha hecho un total de 63 abonos, cada uno por la suma de \$316.226,00, contados desde el primer abono efectuado el día 03 de abril de 2019, los cuales suman un valor total de \$19.922.238,00 hasta la fecha de la presente contestación. En este sentido, aún si el cliente considerar que no debió efectuar ningún pago, situación que por obvias razones no corresponde con el objeto de la presente acción pues en ningún momento se ha puesto en tela de juicio la validez del contrato de mutuo, solo podría solicitar por concepto de daño emergente la suma de \$20.000.000.

En tercera medida, como se ha comentado, no es el Banco quien ha incumplido el contrato, sino el accionante, quien desde la fecha de vencimiento de la primera cuota, es decir el 10 de abril de 2018, ha incumplido sus obligaciones contractuales. Recuérdese que el accionante no efectuó ningún pago del crédito contraído a favor del Banco entre el mes de abril de 2018 a marzo de 2019, situación que actualmente afecta la relación con el Banco derivada de su mora.

Así las cosas, no existe razonabilidad ni justificación de los perjuicios reclamados, razón por la cual se objeta el supuesto juramento estimatorio.

#### **B. EN CUANTO A LAS CONSECUENCIAS DE LA INEXACTITUD O NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES**

Dicho lo anterior, de conformidad con el artículo 206 del C.G.P., modificado por el art. 13 de la ley 1743 de 2014, cuando la cantidad estimada excediere en el 50% de la cantidad probada, o



cuando se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios, el juez deberá imponer la sanción descrita en dichos numerales. Al respecto, reza el precitado artículo:

**ARTÍCULO 206. JURAMENTO ESTIMATORIO. (...)**

(...)

*<Inciso modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) a la que resulte probada, se condenará a quien hizo el juramento estimatorio a pagar al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre la cantidad estimada y la probada.*

(...)

**PARÁGRAFO.** *<Parágrafo modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> También habrá lugar a la condena a la que se refiere este artículo a favor del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, en los eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. En este evento, la sanción equivaldrá al cinco por ciento (5%) del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas.*

*La aplicación de la sanción prevista en el presente parágrafo sólo procederá cuando la causa de la falta de demostración de los perjuicios sea imputable al actuar negligente o temerario de la parte.*

En virtud del precitado artículo, la sanción al accionante por la indebida estimación de los perjuicios deberá aplicarse en el evento en el que los perjuicios demostrados no correspondan en la proporción descrita en el artículo con relación a los solicitados en la demanda inicial. Dicha situación no requiere juicio subjetivo alguno, y deberá condenarse al pago de la misma sanción a favor del Consejo Superior de la Judicatura.

Por otro lado, en el evento en que ocurra la negación de las pretensiones de la demanda, se condenará únicamente al pago del 5% de del valor pretendido de la demanda, siempre que exista una conducta negligente o temeraria de la parte. Esta sanción, a juicio de la suscrita, es totalmente aplicable al accionante, pues es evidente la negligencia con la que actuó en el presente proceso al impetrar una demanda carente de requisitos formales, y sin aportar razones justificadas de los perjuicios que pretende indemnizar. Debe decirse que el impetrar acciones judiciales implica una activación de la justicia sobre la cual existen deberes, obligaciones y cargas procesales que recaen sobre las partes, y sobre las cuales existirán diferentes consecuencias dependiendo de su naturaleza. Para este caso, al incumplir la carga procesal de manera diligente con relación a la demostración de los perjuicios, el accionante incurre en una conducta sobre la cual el artículo 206 del C.G.P. impone una sanción.

Por lo anterior, se solicita a su despacho imponer la sanción que resulte aplicable, teniendo en cuenta la conducta negligente del accionante con relación a la demanda y la acreditación de los perjuicios reclamados.

## VII. PRUEBAS

Solicito al Despacho tener como prueba las siguientes:



## A. DECLARACIÓN DE LA PROPIA PARTE

Si bien ha sido de antaño la discusión acerca de la posibilidad de la declaración de la propia parte como medio de prueba, existen tanto argumentos legales, como doctrinales y jurisprudenciales que habilitan esta figura como medio de prueba autónomo.

En primera medida, de conformidad con el artículo 165 del C.G.P., el legislador estableció el principio de libertad probatorio y enuncia de manera no taxativa los medios de prueba. Al respecto, reza el precitado artículo:

**ARTÍCULO 165. MEDIOS DE PRUEBA.** *Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez.*

*El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales.*

Tanto el último aparte del primer inciso, como la totalidad del segundo inciso, establecen la posibilidad de la solicitud, decreto, práctica y valoración de pruebas que no hayan sido mencionadas expresamente en dicho código, y que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. Es así como se hace necesario establecer como presupuesto la evidente posibilidad del decreto de pruebas distintas a las mencionadas y reguladas en el estatuto procesal, tal como la declaración de la propia parte.

En segunda medida, la doctrina especializada ha reiterado la distinción que existe entre la declaración de la propia parte, el interrogatorio y la confesión, de la siguiente manera:

*A pesar de que la declaración y el interrogatorio de parte están estrechamente ligados, solo aquella es medio probatorio. La declaración de parte puede entenderse como la manifestación realizada por las partes y las otras partes, en la clasificación que propone el Código General del Proceso, acerca de los hechos relacionados en el proceso. En cambio, el interrogatorio de parte no es un medio probatorio, pues como lo indica el artículo 165 del Código General del Proceso, puede ser parte del medio probatorio de la declaración de parte. El interrogatorio de parte, consideraríamos, más bien es una regulación que tiene el propósito de formular preguntas para que sean respondidas por la parte<sup>4</sup>.*

De esta manera, el interrogatorio no debe ser considerado propiamente como el medio de prueba, sino como el mecanismo en virtud del cual puede llegarse al medio de la prueba de la confesión. De la misma manera, el juez podrá permitir a la propia parte efectuar una declaración libre a una de las partes, para que se permite el medio de prueba de la declaración de parte.

<sup>4</sup> Fredy Hernando Toscano Lopez, Juan Carlos Naizir Sistac, Luis Guillermo Acero Gallego, Ramiro Bejarano Guzmán, *Derecho probatorio – Desafíos y perspectivas*, Bogotá D.C. Universidad Externado de Colombia, 2020. P. 183.



Por lo anterior, se solicita que el juez decreto la declaración de la propia parte, la cual podrá rendirse por la suscrita, a efectos de rendir la declaración como medio de prueba efectivo. No obstante, se desiste de la declaración en el evento en que el juez considere pertinente dictar sentencia anticipada.

## B. INTERROGATORIO DE PARTE

De conformidad con el artículo 198 del C.G.P., se requiere al juez para que ordene la citación del accionante a fin de que rinda interrogatorio con relación a la adquisición del crédito, las condiciones en las cuales fue adquirido, y la revocatoria de los ajustes operativos realizados a la fecha. Asimismo, para que informe lo que considere con relación al incumplimiento y daños que menciona haber sufrido.

Así, solicito se sirva fijar fecha y hora para que comparezca el Señor **JESÚS ANTONIO LASPRILLA LASPRILLA** a fin de que ABSUELVA el interrogatorio de parte que en su oportunidad formularé, reservándome el derecho de modificar, cambiar o sustituir, bien sea parcial o totalmente las preguntas allí contenidas al momento de la diligencia, y reconozca los documentos que allí se le pongan de presente. Interrogatorio del cual desisto de dictarse sentencia anticipada.

## C. DOCUMENTALES

Se solicita se tenga en cuenta las que a continuación se mencionan:

1. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá D.C.
2. Certificación de extracto de pago de la entidad CREDIFINANCIERA, **Anexo 1.**
3. Soporte de los recursos recibidos por el demandante con ocasión al desembolso del crédito vigente No. 105110428, **Anexo 2.**
4. Tabla de amortización que contiene las condiciones financieras aprobadas para el crédito vigente No. 105110428, **Anexo 3**
5. Formato "*Información Previa al Otorgamiento de Créditos de Libranza*", **Anexo 4.**
6. Copia de los documentos suscritos por el demandante para el crédito vigente No. 105110428, **Anexo 5.**
7. Soporte de envío novedades de descuento, **Anexo 5.1.**
8. Formato "*Libranza o Autorización de Descuento a Favor del Banco GNB Sudameris*", **Anexo 6.**



9. Reglamento Crédito de Libranza, **Anexo 7.**
10. Contrato para la Utilización de Productos Financieros, **Anexo 8.**
11. Mensajes de Texto (cobranza) enviados al número celular 3202858958, **Anexo 9.**
12. Comunicaciones de notificación de mora, **Anexo 10.**
13. Histórico de pagos de la obligación vigente No. 105110428, **Anexo 11.**
14. Documento *"Guía del Consumidor Financiero – Crédito de Libranza Banco GNB Sudameris"*, **Anexo 12.**
15. Copia de la comunicación de respuesta emitida por el Banco al cliente desde el mes de mayo de 2021 a mayo del 2024, **Anexos 13 al 24**
16. Copia de la comunicación de la novedad por normalización enviada en junio de 2018, **Anexo 25.**
17. Copia de la comunicación de la novedad por normalización enviada en mayo de 2019, **Anexo 26.**
18. Copia de los acuses de recibo de las comunicaciones enviadas en junio de 2018 y mayo de 2019, **Anexo 27.**

#### **VIII. ANEXOS**

Los documentos anunciados en el acápite de PRUEBAS.

#### **IX. DEPENDENCIA JUDICIAL**

Por medio de la presente, autoriza al señor **DIEGO ALEJANDRO VALENCIA JARA**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.192.771.259, con T.P. 387.031 del C. S. de la J., para que consulte el expediente, solicite piezas procesales, radique memoriales, solicite copias, y realice cualquier otra gestión necesaria para el avance del proceso judicial y la gestión encomendada.



**X. NOTIFICACIONES**

Informamos al Despacho que la dirección de notificaciones judiciales es Carrera 7 No. 75-85 y la dirección electrónica para notificaciones judiciales es [jecortes@gnbsudameris.com.co](mailto:jecortes@gnbsudameris.com.co).

Del Señor Juez,

  
**JOHANNA ANDREA ZORRO RODRÍGUEZ**  
C.C. 52.898.163 de Bogotá  
T.P. 150.376 del CS de la J.  
Apoderada General